Asamblea General

16 de septiembre de 2019
Español

Septuagésimo tercer período de sesiones

Tema 74 b) del programa

**Promoción y protección de los derechos humanos:
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros
medios de mejorar el goce efectivo de los derechos
humanos y las libertades fundamentales**

Nota verbal de fecha 13 de septiembre de 2019 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General y tiene el honor de transmitir adjunta una nota verbal dirigida al Secretario General por 30 Estados Miembros (véase el anexo) mediante la cual desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, y señalar los motivos de su persistencia en esa objeción, después de que, el 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General aprobara, en votación registrada, su resolución [73/175](#), titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”.

Los 30 Estados Miembros que se enumeran en la nota verbal adjunta desean señalar a la atención del Secretario General el párrafo 1 de la resolución [73/175](#) de la Asamblea General, en el que la Asamblea reafirmó el derecho soberano de todos los países a definir su propio ordenamiento jurídico, en particular, a fijar las sanciones jurídicas apropiadas, con arreglo a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y tienen a bien solicitar al Secretario General que refleje los motivos que se exponen en la nota verbal adjunta, en particular la reafirmación del derecho soberano de todos los países a definir su propio ordenamiento jurídico que figura en la resolución [73/175](#), en el informe que ha de presentar a la Asamblea en su septuagésimo quinto período de sesiones sobre la aplicación de la resolución [73/175](#), y que haga distribuir la presente nota verbal y su anexo como documento de la Asamblea, en relación con el tema 74 b) del programa.

Anexo de la nota verbal de fecha 13 de septiembre de 2019 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

13 de septiembre de 2019

Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York que se enumeran a continuación tienen el honor de referirse a la resolución [73/175](#) de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, aprobada por la Asamblea el 17 de diciembre de 2018 en votación registrada. Las referidas Misiones Permanentes desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, por los siguientes motivos:

a) No hay consenso internacional sobre la necesidad de abolir la pena de muerte. La votación de las resoluciones sobre este tema en anteriores períodos de sesiones de la Asamblea General ha confirmado este hecho, y la cuestión sigue siendo controvertida. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece, entre otras cosas, que “en los países que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito”;

b) Esta opinión ya se había manifestado anteriormente en:

i) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/71/1047](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [71/187](#) de la Asamblea General;

ii) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/69/993](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [69/186](#) de la Asamblea General;

iii) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/67/841](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [67/176](#) de la Asamblea General;

iv) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/65/779](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [65/206](#) de la Asamblea General;

v) La nota verbal contenida en el documento [A/63/716](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [63/168](#) de la Asamblea General;

- vi) La nota verbal contenida en el documento [A/62/658](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [62/149](#) de la Asamblea General;
- vii) La declaración conjunta contenida en el documento [E/CN.4/2005/G/40](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos;
- viii) La declaración conjunta contenida en el documento [E/CN.4/2004/G/54](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2004/67 de la Comisión de Derechos Humanos;
- ix) La declaración conjunta contenida en el documento [E/CN.4/2003/G/84](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos;
- x) La declaración conjunta contenida en el documento [E/CN.4/2002/198](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2002/77 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xi) La declaración conjunta contenida en los documentos [E/CN.4/2001/161](#) y [E/CN.4/2001/161/Corr.1](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2001/68 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xii) La declaración conjunta contenida en el documento [E/CN.4/2000/162](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2000/65 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xiii) La declaración conjunta contenida en el documento [E/1999/113](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1999/61 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xiv) La declaración conjunta contenida en los documentos [E/1998/95](#) y [E/1998/95/Add.1](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xv) La carta conjunta contenida en los documentos [E/CN.4/1998/156](#) y [E/CN.4/1998/156/Add.1](#), en la que las delegaciones firmantes expresaron sus reservas antes de la aprobación de la resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos;
- xvi) La declaración conjunta contenida en el documento [E/1997/106](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1997/12 de la Comisión de Derechos Humanos;
- c) En la declaración que formuló el 17 de julio de 1998 en el plenario de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, celebrada en Roma, el Presidente de la Conferencia afirmó que el debate mantenido en ese foro sobre la cuestión de las penas que debía aplicar la Corte había puesto de manifiesto la falta de consenso internacional sobre la inclusión o no de la pena de muerte, y añadió que su no inclusión en el Estatuto de Roma no produciría efecto jurídico de ningún tipo en la legislación y las prácticas nacionales referentes a la pena capital, ni debía entenderse que influiría en el desarrollo de una norma consuetudinaria de derecho internacional o de algún otro modo en la legalidad de las penas previstas por los ordenamientos nacionales para los delitos graves. Así pues, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aplicable tan solo a los Estados partes, se establece que nada de lo dispuesto en su parte VII se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación

nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en dicha parte VII;

d) La pena capital se ha caracterizado a menudo como una cuestión de derechos humanos en el contexto del derecho a la vida del condenado. Sin embargo, se trata ante todo de una cuestión inherente al sistema de justicia penal y un importante elemento de disuasión frente a los delitos más graves. Por consiguiente, la pena de muerte debe examinarse desde un punto de vista mucho más amplio y sopesarse en relación con los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a vivir en paz y seguridad;

e) Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social, cultural, jurídico y de justicia penal, a salvo de cualquier injerencia de otros Estados. Además, entre los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y concretamente en el Artículo 2, párrafo 7, se establece claramente que ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. En consecuencia, el mantenimiento o la abolición de la pena de muerte, y los tipos de delitos a los que se aplica dicha pena, son cuestiones que deben ser estudiadas por cada Estado, teniendo plenamente en cuenta los sentimientos de su propio pueblo, la situación en lo que respecta a la delincuencia y la política en materia penal. A este respecto, resulta improcedente intentar adoptar decisiones universales sobre esta cuestión, imponer a los Estados Miembros medidas que competen a su jurisdicción interna o intentar modificar, por medio de una resolución de la Asamblea General, normas de derecho internacional establecidas tras un amplio proceso de negociación;

f) Algunos Estados Miembros han decidido voluntariamente abolir la pena de muerte, mientras que otros han optado por imponer una moratoria a las ejecuciones. Al mismo tiempo, otros muchos Estados Miembros mantienen la pena de muerte en su legislación. Todos los Estados Miembros actúan de conformidad con sus obligaciones internacionales. Cada Estado Miembro ha elegido libremente, de acuerdo con su propio derecho soberano consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, el camino adecuado a sus propias necesidades sociales, culturales y jurídicas a fin de mantener la seguridad, el orden y la paz en la sociedad. Ningún Estado Miembro tiene derecho a imponer su posición a los demás.

Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de los Estados Miembros que se enumeran a continuación tienen a bien solicitar al Secretario General que haga distribuir la presente nota verbal como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 74 b) del programa.

1. Bahrein
2. Bangladesh
3. Botswana
4. Brunei Darussalam
5. Chad
6. China
7. República Popular Democrática de Corea
8. Egipto
9. Etiopía
10. Granada
11. Irán (República Islámica del)

12. Iraq
13. Jamaica
14. Kuwait
15. Libia
16. Nigeria
17. Omán
18. Pakistán
19. Papua Nueva Guinea
20. Qatar
21. Saint Kitts y Nevis
22. Santa Lucía
23. San Vicente y las Granadinas
24. Arabia Saudita
25. Singapur
26. Sudán
27. República Árabe Siria
28. Emiratos Árabes Unidos
29. Yemen
30. Zimbabwe
-